

DRC CONSEJO
DANÉS PARA
REFUGIADOS

DRC
COLOMBIA

**Monitoreo de
Protección**

Abril – Junio de 2026



Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.

1. Introducción	3
2. Hallazgos principales	4
3. Actualización de contexto	5
4. Metodología	9
4.1. Municipios de recolección MP-Encuestas Hogar	10
5. Riesgos de Protección	11
5.1. Desplazamiento forzado	11
5.2. Ataques contra la población civil	17
5.3. Reclutamiento, uso y utilización	23
5.4. Restricciones a la movilidad en Nariño	28
6. Recomendaciones	32

1 Introducción

Este informe presenta los hallazgos del Monitoreo de Protección (MP) realizado por DRC en Colombia entre abril y junio de 2026 en los departamentos de La Guajira, Nariño y Norte de Santander. A través de encuestas a hogares, entrevistas a actores clave, grupos focales y observación directa, datos recopilados a través del monitoreo de la iniciativa ProLAC¹, el MP busca identificar riesgos de protección, violaciones de derechos humanos, así como comprender las capacidades y estrategias de afrontamiento de la población refugiada, migrante, desplazada interna, retornada y sin movilidad afectada por el conflicto armado.

Los hallazgos contribuyen a informar la respuesta humanitaria en curso y futura, permitir la identificación de personas en situación de mayor riesgo para brindar apoyo individualizado y fortalecer la incidencia basada en evidencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de deberes en materia de protección de la población afectada.

Contacto:

Luca Cafagna
Director de Programas
DRC Colombia

Email: luca.cafagna@drc.ngo



1. ProLAC, iniciativa regional de gestión de información de protección que ofrece un sistema armonizado de monitoreo de protección que funcione como base de evidencia para mejorar las respuestas de protección y humanitarias efectivas y eficientes a nivel regional, nacional, y local. consulte aquí: [ProLAC](#)

2 Hallazgos principales

- ▶ **El desplazamiento forzado continúa siendo el principal riesgo de protección reportado durante el segundo trimestre de 2026.** El 83,4 % de los hogares que reportaron abusos señaló haber experimentado desplazamiento forzado, frente al 71 % del trimestre anterior, y Norte de Santander concentró el 77 % de los reportes. La persistencia de amenazas, confrontaciones y dinámicas de control territorial continúa asociada a la movilidad forzada, mientras las condiciones de inseguridad y la pérdida de bienes y medios de vida limitan las posibilidades de recuperación y retorno seguro.
- ▶ **La creciente utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) con artefactos explosivos improvisados (AEI) está modificando las modalidades de confrontación, particularmente en Norte de Santander en la subregión del Catatumbo.** Esta dinámica amplía las formas de exposición de la población civil, genera afectaciones sobre personas y bienes civiles, incrementa la imprevisibilidad del riesgo y puede contribuir a nuevos desplazamientos y cambios en los patrones de movilidad y protección.
- ▶ **Los ataques contra la población civil, amenazas e intimidaciones continúan siendo un riesgo relevante pese a la disminución agregada de hogares que reportaron esta afectación, del 34,5 % al 29 %.** Las tendencias presentan importantes diferencias territoriales y mantienen una estrecha relación con dinámicas de control territorial, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, afectando particularmente a liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y autoridades étnicas.
- ▶ **La exposición prolongada a desplazamiento, amenazas, ataques, reclutamiento y restricciones a la movilidad se asocia con afectaciones psicosociales y comunitarias que trascienden a las víctimas directas.** El miedo persistente, la ansiedad, la incertidumbre, el desarraigo y el deterioro de las relaciones de confianza afectan particularmente a NNA, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas, en contextos donde el acceso a servicios especializados de salud mental y apoyo psicosocial continúa siendo limitado.
- ▶ **Las estrategias de afrontamiento combinan mecanismos de autoprotección y apoyo comunitario con medidas que pueden profundizar vulnerabilidades existentes.** Los hogares recurren a redes familiares, restringen sus movimientos y modifican sus rutinas para reducir la exposición inmediata, mientras el endeudamiento y la reducción del consumo de alimentos pueden deteriorar progresivamente su capacidad de recuperación. Las redes y liderazgos comunitarios continúan constituyendo capacidades fundamentales de protección.

► **En Nariño, las restricciones a la movilidad afectan particularmente a comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en zonas rurales y dispersas.** Las normas impuestas por los GANE, la presencia o sospecha de MAP y AEI y el temor a represalias generan restricciones directas y procesos de autocontención que limitan el acceso a servicios, medios de vida, territorio y prácticas comunitarias.

► **El reclutamiento, uso y utilización de NNA continúa siendo un riesgo crítico y probablemente subregistrado en Norte de Santander y Nariño.** Las modalidades de captación combinan coerción, persuasión, incentivos materiales, engaño y uso de redes sociales, con patrones diferenciados según edad y género. El temor a denunciar, las modalidades menos visibles de captación y la limitada cobertura institucional en zonas rurales dificultan la identificación temprana y la respuesta efectiva.

3 Actualización de contexto

Durante el segundo trimestre de 2026, el contexto de protección en Colombia continuó marcado por la persistencia y, en algunos territorios, la intensificación de las dinámicas de conflicto armado y otras situaciones de violencia asociadas al control territorial y de economías ilícitas por parte de los GANE² durante el periodo de enero y mayo de 2026, se han documentado alrededor de 63 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 12.071 personas y 36 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 61.104 personas. En comparación con el mismo periodo de 2025, el número de eventos de desplazamiento aumentó de 47 a 63, aunque disminuyó el número total de personas afectadas, debido al

carácter excepcional del desplazamiento masivo de más de 70.000 personas registrado en la subregión del Catatumbo³. Esta tendencia evidencia la persistencia de la movilidad forzada como una de las principales consecuencias humanitarias y de protección del conflicto armado.

Entre abril y junio 2026, se registraron además 776 eventos relacionados con el conflicto armado y otras situaciones de violencia, incluyendo ataques contra la población civil, acciones armadas, uso de artefactos explosivos y restricciones al acceso humanitario. Mayo concentró el mayor número de eventos de violencia (295)⁴, reflejando la persistencia de escenarios de confrontación y

2. Defensoría del Pueblo. (mayo de 2026). Dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia. Disponible en: [Consulte los boletines mensuales de la Defensoría del Pueblo sobre la movilidad forzada en Colombia - Defensoría](#)

3. Unidad para las Víctimas (2025). Observatorio de unidad para las víctimas, emergencia humanitaria Catatumbo. Encuentre aquí: [Boletín Catatumbo-UARIV-Edición 24.pdf](#)

4. Monitor, OCHA 2026. Consulte aquí: <https://monitor.unocha.org/colombia>

violencia con impactos directos e indirectos sobre la población civil.

Además, durante el periodo de enero a mayo, 67 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos (55 hombres y 12 mujeres) fueron asesinados, donde se confirman 58 masacres con 238 víctimas. Abril presentó la mayor concentración de hechos de violencia contra este grupo poblacional, evidenciando la persistencia de riesgos diferenciados para quienes ejercen funciones de liderazgo, representación comunitaria y defensa de derechos⁵.

A este panorama se sumaron riesgos de protección vinculados a dinámicas de coerción y control social por parte de los GANE en el contexto del proceso electoral de 2026, en territorios bajo influencia o control de GANE. La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles acciones de coerción, restricciones a la movilidad, instrumentalización de la población civil y afectaciones al ejercicio libre de los derechos políticos. En estos territorios, las formas de gobernanza armada y control social pueden limitar la capacidad de las comunidades para participar de manera libre y segura en los procesos electorales, particularmente en zonas rurales con limitada presencia institucional⁶.

En **Norte de Santander**, particularmente en la subregión del Catatumbo, persistió la confrontación entre estructuras de dos GANE, asociada

a la disputa por el posicionamiento y control territorial, las economías ilícitas y los corredores estratégicos. Entre abril y junio se reportaron 88 eventos relacionados con el conflicto armado y otras situaciones de violencia, incluyendo acciones armadas, desplazamientos forzados, ataques contra la población civil y utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI) mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS)⁷. Estas dinámicas mantuvieron un escenario de crisis de protección prolongada, particularmente en los municipios de Tibú y El Tarra.

En este contexto, se registraron dos eventos de desplazamientos masivos en Tibú y El Tarra. En Tibú 359 familias (aproximadamente 1.044 personas) fueron desplazadas, entre ellas 435 personas refugiadas y migrantes y alrededor de 430 NNA⁸. En una zona rural de El Tarra, un segundo evento generó el desplazamiento de 784 personas, incluyendo 186 NNA. En lo corrido de 2026, se han registrado 13 eventos de desplazamiento forzado que han afectado a 2.447 personas en el Catatumbo⁹, evidenciando la persistencia del desplazamiento forzado como una de las principales consecuencias de la confrontación armada en la subregión.

Paralelamente, la utilización de UAS con AEI se consolidó como una modalidad de violencia con impactos directos e indirectos sobre la población civil. En Tibú, un ataque con AEI lanzados desde

5. Defensoría del pueblo (2026). "En cinco meses, 67 lideresas y líderes asesinados y 58 masacres: Colombia no detiene la violencia en los territorios". Consulte aquí: <https://www.defensoria.gov.co/-/colombia-no-detiene-la-violencia-en-los-territorios>

6. Defensoría del pueblo. Alerta temprana 012-2025: "para los procesos electorales de 2025 y 2026"

7. OCHA (2026). Flash Update, "emergencias humanitarias en Tibú-norte de Santander".

8. Ibid

9. Defensoría del pueblo: 784 personas se desplazaron en el Catatumbo ante nuevos hechos de violencia y riesgos para la población civil. Consulte aquí: <https://www.defensoria.gov.co/-/784-personas-se-desplazaron-en-el-catatumbo-ante-nuevos-hechos-de-violencia-y-riesgos-para-la-poblacion-civil>

drones contra una iglesia y una vivienda causó la muerte de un niño de 10 años y dejó cinco personas civiles heridas, entre ellas una niña de dos años¹⁰. De los 11 eventos asociados al uso de drones documentados durante el primer semestre de 2026, seis estuvieron dirigidos contra bienes militares y cinco ocurrieron en escenarios de confrontación que generaron afectaciones sobre bienes y población civil. El 81 % de estos eventos se concentró en Tibú y El Tarra¹¹.

En conjunto, la persistencia de los enfrentamientos, los nuevos desplazamientos y la incorporación de UAS con AEI a las dinámicas de confrontación mantuvieron elevados niveles de exposición de la población civil y profundizaron la crisis de protección en el Catatumbo durante el trimestre.

En **Nariño**, el contexto de protección estuvo marcado por la interacción entre la persistencia del control territorial de los GANE, la continuidad de los diálogos de paz, las operaciones de la Fuerza Pública y el proceso electoral. Aunque se reanudaron formalmente las negociaciones entre el Gobierno Nacional y un GANE, la presencia y el control territorial de actores armados continuaron generando riesgos para la población civil en la costa Pacífica, el Triángulo del Telembí y Sanquianga.

Los procesos de diálogos entre el Gobierno Nacional y un GANE se reanudó formalmente en la mesa de negociación y se desarrolló el séptimo ciclo de conversaciones en Nariño, luego de desacuerdos entre las partes¹² y se dio la continuidad del proceso de negociación¹³. En consecuencia, el gobierno nacional expidió medidas temporales para facilitar el traslado de integrantes de los GANE hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo y formalizó un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación con participación del Gobierno Nacional, el GANE y la MAPPOEA¹⁴.

Al mismo tiempo, persistió la presencia y el control territorial ejercido por los GANE en la costa Pacífica, el Triángulo del Telembí y el Sanquianga. Durante el trimestre se registró un incidente por AEI en el municipio de Olaya Herrera, así como la identificación de artefactos explosivos en el casco urbano de Roberto Payán. Adicionalmente, se reportaron eventos relacionados con AEI en zona rural del municipio de Tumaco, dejando en evidencia la contaminación por AEI en zonas rurales y su proximidad a centros poblados.

10. Quintero, L. N. (2026, 19 de junio). Ataque a iglesia cristiana y una casa en zona rural del Norte de Santander con drones explosivos: un menor de 10 años falleció en los hechos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ataque-a-iglesia-cristiana-y-una-casa-en-zona-rural-del-norte-de-santander-con-drones-explosivos-un-menor-de-10-anos-fallecio-en-los-hechos-3565444>

11. Fundación Paz y Reconciliación (PARES). (2026, 3 de julio). El uso de drones en el Catatumbo: una nueva amenaza para la población civil. PARES. <https://www.pares.com.co/el-uso-de-drones-en-el-catatumbo-una-nueva-amenaza-para-la-poblacion-civil/>

12. Marín Molano, P. A. (206, 24 de abril). Crisis en los diálogos regionales de paz en Nariño. PARES (Fundación Paz y Reconciliación). <https://www.pares.com.co/crisis-en-los-dialogos-regionales-de-paz-en-narino/>

13. Caracol Radio. (2026, 26 de abril). Se reanudan diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2026/04/26/se-reanudan-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-la-coordinadora-nacional-ejercito-bolivariano/>

14. Presidencia de la República de Colombia. (2026, 13 de junio). Decreto 603 de 2026 [PDF]. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20No.%200603%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202026.pdf>

Finalmente, la Fuerza Pública mantuvo operaciones contra estructuras del GANE, incluyendo capturas, destrucción de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes e incautación de armamento, explosivos y otros materiales de guerra. Estos operativos se presentaron en zonas rurales de los municipios de Barbacoas¹⁵, El Charco y Llorente en Tumaco. Además, en este trimestre se reportó el aumento de Fuerza Pública en municipios de Nariño¹⁶, así como la implementación de planes de seguridad en el marco del proceso electoral¹⁷.

Durante el periodo, el departamento de **La Guajira** presentó una intensificación de las dinámicas de la disputa territorial entre GANE, particularmente en la jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta y en municipios como Riohacha, Maicao y Dibulla. Estas dinámicas se expresaron mediante acciones armadas, amenazas homicidios y restricciones a la movilidad, con impactos sobre las actividades económicas y educativas y un incremento de la exposición de la población civil en zonas urbanas y corredores estratégicos. Durante el mes de abril se presentó un paro armado (el segundo en el curso del año)

registrando el cierre de establecimientos comerciales y restricciones a la movilidad, el cual se extendió durante 72 horas, atribuido presuntamente a uno de los GANE¹⁸.

Asimismo, se registraron 32 homicidios, de los cuales el 81 % se concentró en los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia, en un contexto marcado por disputas por el control territorial entre GANE y mayores riesgos de protección para la población civil, particularmente en zonas urbanas y corredores estratégicos donde convergen intereses de los actores armados¹⁹. Aunado a estos eventos, se presentó un atentado con explosivos contra el Batallón Cartagena²⁰, lo cual dejó 12 soldados heridos. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las actividades académicas en instituciones educativas cercanas, restringieron la movilidad sobre la vía Riohacha–Maicao y se produjo el cierre temporal de establecimientos comerciales ubicados en el área de influencia.

15. Ejército Nacional de Colombia. (2026, 16 de abril). Contundencia operacional: Ejército Nacional capturó a dos grandes expendedores de drogas en el Pacífico sur de Nariño. Ejército Nacional de Colombia. <https://www.ejercito.mil.co/contundencia-operacional-ejercito-nacional-capturo-a-dos-grandes-expendedores-de-drogas-en-el-pacifico-sur-de-narino>

16. Ministerio de Defensa Nacional. (2026, 19 de abril). MinDefensa anuncia fortalecimiento del pie de fuerza y articulación institucional para la seguridad de Nariño y zona fronteriza. Ministerio de Defensa Nacional. <https://www.mindefensa.gov.co/prensa/noticia-visualizacion/mindefensa-anuncia-fortalecimiento-pie-de-fuerza-articulacion>

17. Caracol Radio. (2026, 26 de mayo). Armada despliega más de 4 mil 600 uniformados para garantizar seguridad electoral en el Pacífico. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2026/05/26/armada-despliega-mas-de-4-mil-600-uniformados-para-garantizar-seguridad-electoral-en-el-pacifico/>

18. Noticias RCN. (2026, 17 de abril). Segundo paro armado en Riohacha en lo que va de 2026 deja pérdidas superiores a los 35.000 millones. Noticias RCN. <https://www.noticiasrcn.com/colombia/segundo-paro-armado-en-riohacha-en-lo-que-va-de-2026-deja-perdidas-superiores-a-los-35-000-millones-1013286>

19. Guajira News. (2026, 2 de julio). La Guajira cerró junio con 32 homicidios y Riohacha continuó encabezando las cifras de violencia. <https://www.guajiranews.com/destacadas/la-guajira-cerro-junio-con-32-homicidios-y-riohacha-continuo-encabezando-las-cifras-de-violencia/>

20. Mejía, E. (2026, 27 de mayo). Riohacha amaneció semiparalizada tras atentado al Batallón Cartagena: suspenden clases y restringen movilidad en la vía a Maicao. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/riohacha-amanecio-semiparalizada-tras-atentado-al-batallon-cartagena-suspenden-clases-y-restringen-movilidad-en-la-via-a-maicao-3558719>

En el mes de junio, la defensoría del pueblo ha emitido la alerta temprana 013-2026 de inminencia²¹ para el municipio de Maicao, reconociendo vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH en consecuencia a la expansión territorial de uno de los GANE hacia el municipio de frontera. Esta situación particular amplía el margen de riesgo contra

la población civil en la que se disputan zonas urbanas y rurales como los corregimientos de Paraguachon y Carraipia, lugares con antecedentes de control hegemónico por parte de uno de los GANE. Lo anterior y los cierres continuos de la vía Riohacha-Maicao han provocado la reprogramación de varias actividades humanitarias en Maicao y otras zonas.

4 Metodología

La información del MP fue recopilada mediante un enfoque metodológico mixto, que combinó encuestas presenciales a hogares (EH), entrevistas a actores clave (EAC), discusiones en grupos focales (DGF) y observación directa. Esta diversidad de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, permitió obtener una comprensión profunda y detallada de las percepciones individuales y colectivas sobre necesidades, riesgos

de protección y capacidades. La recolección de datos se complementó con la revisión de fuentes secundarias y con información recabada en espacios de coordinación a nivel local y nacional. A partir de estas fuentes, el análisis trianguló los resultados de las encuestas a hogares con la información cualitativa recopilada, particularmente para riesgos susceptibles de subregistro.

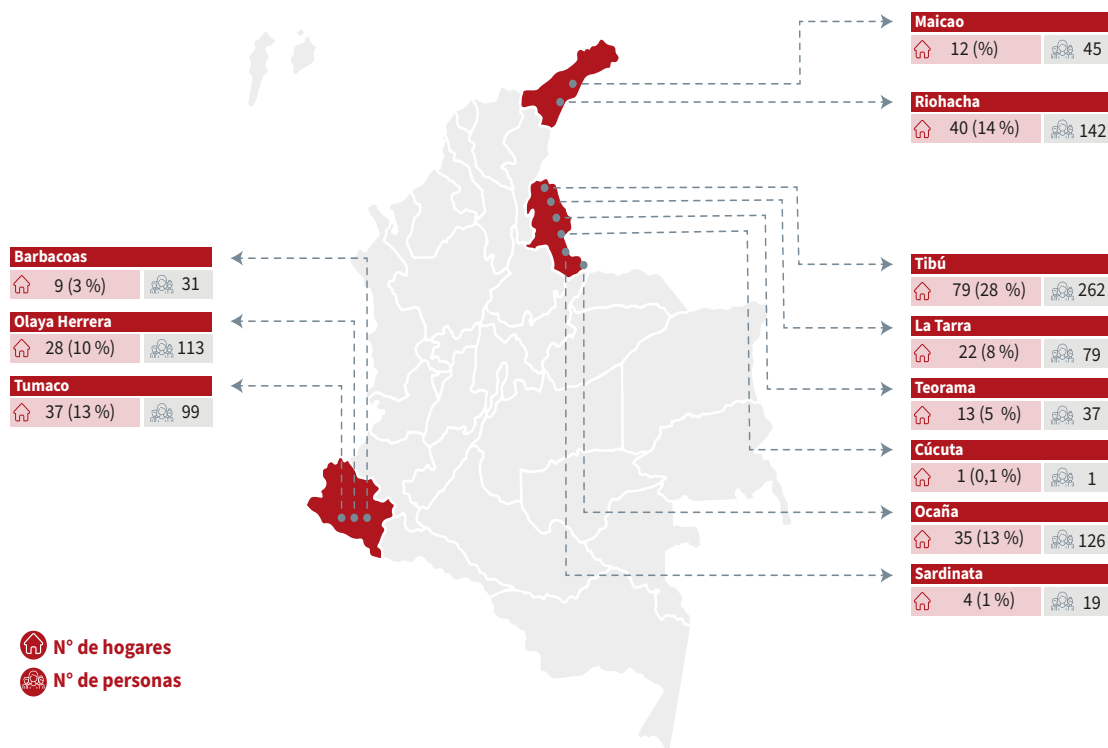


21. Defensoría del Pueblo 2026: Alerta temprana 013-2026 de inminencia.



4.1 Municipios de recolección MP-Encuestas Hogar

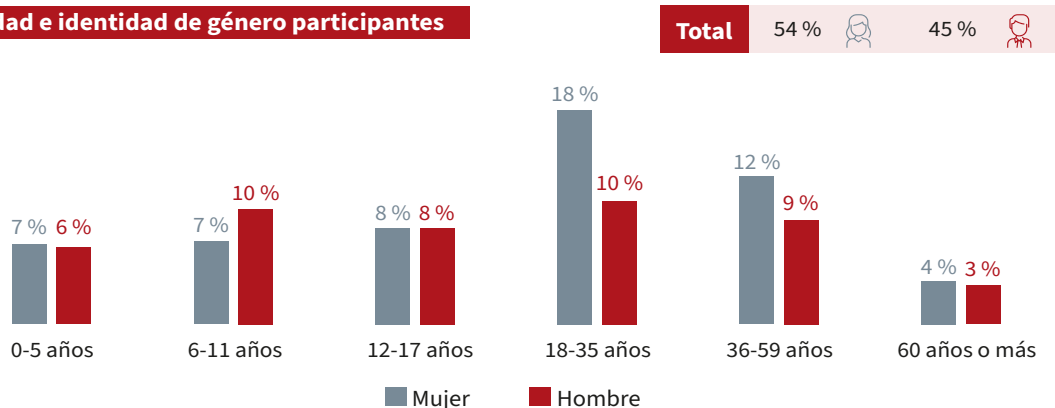
Municipios de recolección



Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026 los equipos de protección de DRC realizaron encuestas a 279 hogares (950 personas) en Nariño (26 %), Norte de Santander (55 %) y La Guajira (19 %). El 57 % de los hogares correspondió a un perfil de **desplazamiento interno**, el 27,2 % se encontraban en **otras**

situaciones de violencia (OSV) y el 15,8 % en **Destino**, tanto en zonas rurales como urbanas de los tres departamentos. La información cuantitativa se complementó con 21 entrevistas a actores clave y dos discusiones en grupos focales.

Edad e identidad de género participantes



Del total de personas alcanzadas, el 54 % fueron mujeres, el 45 % hombres y el 1 % prefiere no responder. Los NNA representaron el 44,8 % de la población, mientras que el 6,8 % correspondió a personas de 60 años o más. En términos de diversidad, el 27,1 % de las personas se identificó como

población afrodescendiente y el 6,2 % como población indígena. Asimismo, el 8,5 % de los hogares contaba con al menos una persona con discapacidad. Estas características fueron consideradas de manera transversal en el análisis de exposición diferenciada a los riesgos de protección.

Nacionalidad	
Total	73,6 % 
	24,7 % 
	1,6 % ②

	Nac. Colombiana
	Nac. Venezolana
②	Doble nacionalidad

Pertenencia étnica	
Ninguna	62,2 %
Grupos indígenas	27,4 %
Afrodescendientes	6,2 %

5 Riesgos de protección

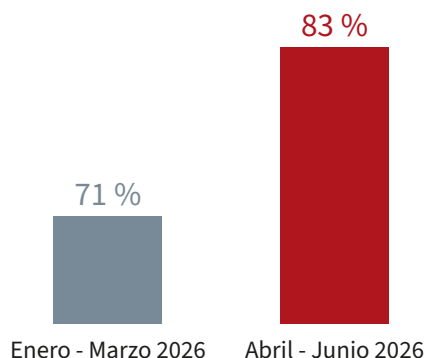
➔ 5.1 Desplazamiento forzado

“Frente al desplazamiento hay pérdidas materiales por la afectación de las viviendas, por las detonaciones explosivas y los mismos combates, inclusive las familias no retornan porque no tienen donde vivir por la pérdida total de las viviendas, también pierden su motor, su embarcación que son las herramientas de sustento” (EAC, Nariño 2026).

El desplazamiento forzado continúa siendo uno de los riesgos de protección con mayor recurrencia en los departamentos de Nariño y Norte de Santander. Entre abril y junio de 2026, 83,4 % de los hogares encuestados reportó este abuso, lo que repre-

senta un incremento de 12 puntos porcentuales frente al trimestre enero-marzo de 2026 (71 %). Este aumento se produce en un contexto de persistencia e intensificación de factores asociados al desplazamiento, incluyendo enfrentamientos entre GANE por el control territorial y de economías ilícitas, amenazas e intimidaciones y ataques contra la población civil. A estas dinámicas se suma la creciente utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) con artefactos explosivos improvisados (AEI), particularmente en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, que amplía la exposición de personas y bienes civiles y está contribuyendo a nuevos desplazamientos.

Comparativo desplazamiento forzado



Territorialmente, **Norte de Santander** concentró el 77 % de los reportes de desplazamiento forzado, dentro de la muestra monitoreada, seguido por **Nariño**, con el 15 %. En **La Guajira** el 8 % de los hogares monitoreados reportó el desplazamiento como el principal abuso, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales frente al trimestre anterior (enero-marzo). Estas diferencias reflejan dinámicas territoriales específicas del conflicto y la violencia, mientras que, de manera transversal, los hallazgos muestran la persistencia de amenazas, disputas por el control territorial y otras formas de coerción como factores asociados al desplazamiento forzado.

En **Norte de Santander**, el desplazamiento se presentó de manera masiva e individual (gota a gota), particularmente en los municipios de Tibú y el Tarra, donde la intensificación de los enfrentamientos entre GANE generó el desplazamiento forzado de 1.828 personas. Las dinámicas de confrontación estuvieron acompañadas de amenazas e intimidaciones contra la población civil, materializadas a través de la quema de viviendas y afectaciones a bienes civiles (establecimientos comerciales, escuelas, centros de salud, entre

otros). A estas dinámicas se suma la creciente utilización de UAS con AEI, que, según la información cualitativa, ha modificado la percepción y las modalidades de exposición al riesgo de las comunidades. La posibilidad de ataques desde el aire amplía las áreas percibidas como inseguras y aumenta la imprevisibilidad de la violencia, contribuyendo a decisiones de desplazamiento incluso ante la ausencia de enfrentamientos directos en el lugar de residencia.

“Decidimos salir porque los drones ya estaban cayendo sobre las casas” (...) “uno de los grupos nos dijo que teníamos que irnos porque no iban a responder por nadie. Ellos ya no respetan; hasta se meten a las escuelas, dicen que no van a responder por nadie” (EAC, Norte de Santander).

En **Nariño**, se registró un evento de desplazamiento masivo en el municipio de Roberto Payán con un total de 182 hogares (298 personas) pertenecientes a comunidades étnicas. De acuerdo con la información recopilada, el desplazamiento estuvo asociado a disputas por el control territorial y mecanismos de intimidación y control social ejercido por un GANE sobre las comunidades. La presencia armada no solo genera riesgos directos para la integridad y seguridad de la población, sino que interfiere en las dinámicas familiares y comunitarias y restringe la capacidad de las personas para desarrollar libremente sus actividades cotidianas. Como señalo un actor clave “*intentan adueñarse de los territorios y de las mismas viviendas, interfieren en las decisiones de las familias, atemorizan a los niños y jóvenes, quienes se sienten oprimidos y no pueden comportarse libremente, porque la sola presencia de estos actores los obliga a callar*”.

En **la Guajira** los desplazamientos individuales se presentan en un contexto de disputa entre GANE por el control territorial de la jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta, zona estratégica que conecta los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena y constituye un corredor para economías ilícitas. La intimidación y las amenazas, incluyendo aquellas difundidas mediante panfletos, han generado restricciones a la movilidad y desplazamientos individuales, afectando particularmente a liderazgos sociales. Estas dinámicas evidencian el uso de la coerción y la intimidación como mecanismos de control sobre la población civil y el territorio.

Entre los hogares afectados por desplazamiento se identifican condiciones de vulnerabilidad diferenciadas territorialmente que pueden incrementar la exposición a riesgos y limitar sus capacidades de afrontamiento y recuperación. En **Norte de Santander**, destacan los hogares con jefatura monoparental (42 %) y la presencia de mujeres gestantes y lactantes (42 %) y condiciones médicas graves (23 %). En **Nariño**, el 40 % de los hogares incluye al menos una persona con discapacidad y el 16,7 % corresponde a hogares monoparentales, en un contexto donde el 97 % de población monitoreada se autoidentifica como afrodescendiente. En **la Guajira** el 59 % de los hogares afectados por desplazamiento incluye al menos una persona con discapacidad y el 50 % corresponde a hogares monoparentales.

“Las familias campesinas que habitan estas zonas quedan expuestas a constantes presiones, amenazas, enfrentamientos y restricciones que afectan directamente su seguridad, permanencia

y condiciones de vida. Asimismo, esta situación incrementa los niveles de vulnerabilidad de la población rural, ya que muchas familias dependen exclusivamente de sus tierras, cultivos y actividades agropecuarias para su subsistencia. Por ello, los desalojos y desplazamientos forzados no solo implican la pérdida del lugar de residencia, sino también la afectación de sus medios de vida, sus redes comunitarias y su arraigo territorial”

(EAC, Norte de Santander 2026)

El acceso a mecanismos institucionales de protección continúa siendo limitado. Entre los hogares encuestados, el 25 % señaló no haber podido denunciar el hecho victimizante. Las principales barreras identificadas fueron la estigmatización o discriminación por parte de las instituciones (49,7 %), la falta de herramientas o recursos para realizar la denuncia (40,4 %) y el temor a represalias o estigmatización por parte de los grupos armados (34,5 %).

En **Norte de Santander** y **Nariño**, estas barreras se superponen en contextos de influencia y control territorial de GANE: el temor a la vigilancia, las represalias y la exposición de información sensible reduce la disposición de las personas a denunciar, mientras que las percepciones de discriminación y falta de confidencialidad y efectividad de los mecanismos institucionales puede profundizar la desconfianza. En conjunto, estas condiciones pueden contribuir al subregistro de hechos victimizantes y limitar el acceso efectivo de la población afectada a mecanismos de protección y justicia.

“Las instituciones conocen muchísimo más de fondo que nosotros la realidad”(…) “no se puede denunciar ni ante defensoría, ni Personería, ni Fiscalía, no se puede en ninguna parte”

(EAC, Nariño 2026).

El desplazamiento genera además afectaciones psicosociales significativas en los hogares y comunidades, expresadas en miedo persistente, ansiedad, incertidumbre y debilitamiento de las relaciones comunitarias y redes de confianza. Estas afectaciones impactan de manera diferenciada a NNA, mujeres y personas mayores. En el caso de NNA, a las afectaciones emocionales se suman interrupciones en la continuidad educativa asociadas a dificultades para acceder a cupos, limitada flexibilización de los procesos educativos y restricciones de acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos en los lugares de acogida.

El desarraigo constituye además una consecuencia relevante del desplazamiento, particularmente para comunidades cuya identidad, medios de vida y relaciones sociales están estrechamente vinculados al territorio. El abandono abrupto de viviendas, bienes y medios de subsistencia genera sentimientos de pérdida, duelo e incertidumbre y puede debilitar los mecanismos comunitarios de apoyo y protección que contribuyen a la capacidad de afrontamiento y recuperación de los hogares.

Un actor clave Nariño indica *“que suceda el desplazamiento es agotador, porque la gente de la comunidad sale sin nada, o sea, saca lo único que está, con lo que puedan salir, ellas llegan, nosotros tenemos la oficina que creo que es donde están ellos y toca tratar de organizarlos como se pueda”*.

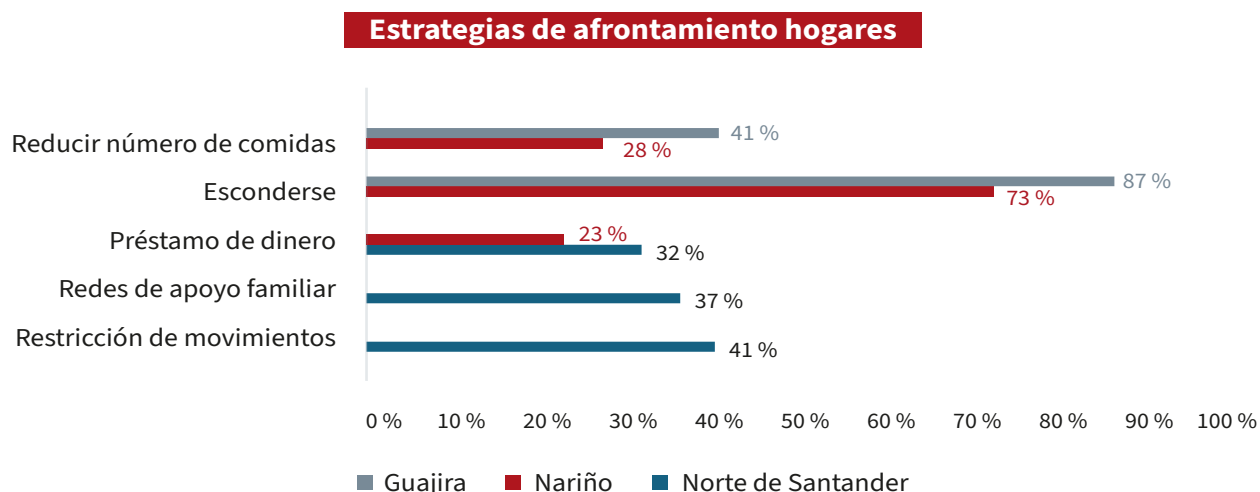
La pérdida o abandono de viviendas, bienes productivos y medios de vida profundiza la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares desplazados. En Nariño, actores clave reportaron pérdida de viviendas, embarcaciones y motores utilizados como herramientas de subsistencia, reduciendo la capacidad de los hogares para generar ingresos y creando barreras adicionales para un eventual retorno. La pérdida de activos productivos puede prolongar la dependencia de redes familiares, comunitarias y de asistencia humanitaria incluso cuando las condiciones de seguridad permiten considerar el regreso.

Las estrategias de afrontamiento adoptadas por los hogares presentan variaciones territoriales y combinan mecanismos orientados a reducir la exposición inmediata ha amenazas con estrategias que pueden profundizar vulnerabilidades existentes. En **Norte de Santander**, las principales estrategias reportadas fueron la restricción de movimientos (40,5 %), recurrir a redes de apoyo familiar (36,5 %) y el préstamo de dinero (32,5 %). Mientras que la restricción de movimientos busca reducir la exposición inmediata a situaciones de violencia y las redes familiares constituyen un mecanismo de protección y apoyo, el endeudamiento para cubrir necesidades básicas puede deteriorar progresivamente la capacidad económica de los hogares desplazados.

En **Nariño**, predominaron estrategias de evasión, principalmente esconderse (73,8 %), junto con la reducción del número de comidas (27,5 %), y el préstamo de dinero (23,8 %). En hogares monoparentales con jefatura femenina, la reducción del consumo ha implicado priorizar la alimenta-

ción de NNA y personas mayores, concentrando de manera desproporcionada los efectos de la escasez sobre las mujeres cuidadoras. **En La Guajira**, esconderse (87 %) y la restricción de mo-

vimientos (41,3 %), constituyeron las principales estrategias reportadas, reflejando cambios en los patrones cotidianos de movilidad orientados a reducir la exposición ha amenazas.



Nota: Los hogares suelen combinar estrategias de afrontamiento ante la exposición al riesgo.

En conjunto, las estrategias identificadas responden principalmente a la necesidad de reducir la exposición inmediata a los riesgos y afrontar las consecuencias del desplazamiento. Sin embargo, algunas de ellas, como el endeudamiento y la reducción del consumo de alimentos pueden generar nuevas vulnerabilidades y erosionar progresivamente la capacidad de recuperación de los hogares, particularmente cuando el desplazamiento se prolonga y la asistencia disponible resulta insuficiente.

Las redes familiares y comunitarias constituyen una de las principales capacidades de protección frente a las consecuencias inmediatas del desplazamiento. En **Nariño y Norte de Santander**, los hogares identifican a familiares y amistades como su principal fuente de apoyo, seguidos por

liderazgos sociales y religiosos y personas defensoras de derechos humanos. Estas redes facilitan alojamiento y asistencia inmediata, contribuyen a la identificación y caracterización de hogares afectados y desempeñan un papel de intermediación con instituciones y organizaciones humanitarias para favorecer el acceso a asistencia y servicios.

Sin embargo, estas capacidades comunitarias operan en un contexto de limitaciones de la respuesta institucional. Los hogares reportan desconfianza hacia instituciones locales asociada a respuestas percibidas como insuficientes, limitada efectividad de las medidas de protección y temor a estigmatización o represalias. Estas brechas incrementan la dependencia de redes comunitarias y organizaciones humanitarias,

haciendo que las propias comunidades asuman una parte significativa de la respuesta inmediata frente al desplazamiento.

“La respuesta institucional resulta insuficiente frente a las necesidades reales de las comunidades afectadas, generando mayores niveles de vulnerabilidad y desprotección para las familias que se ven obligadas a abandonar sus territorios de manera forzada” (EAC, Norte de Santander, 2026).

La persistencia de condiciones de inseguridad limita las posibilidades de retorno seguro y sostenible de las personas desplazadas. El 46 % de los hogares identificó la inseguridad y la violencia generalizada como principal preocupación frente al retorno a su lugar de origen, seguido por los riesgos contra la vida (43,2 %), y la presencia y actuación de GANE (41,7 %). Estos hallazgos evidencian que las amenazas que originaron el desplazamiento permanecen activas en numerosos territorios y continúan condicionando las decisiones de retorno.

Principales preocupaciones de los hogares frente al retorno al lugar de origen



Nota: los hogares reportan más de una preocupación con su retorno al lugar de origen

A ello se suman, en algunos contextos, la pérdida o destrucción de viviendas y medios de vida, que pueden constituir barreras adicionales incluso cuando las condiciones de seguridad permiten considerar el regreso. La combinación de amenazas persistentes, pérdida de activos y limitada

capacidad de respuesta institucional puede prolongar el desplazamiento y aumentar el riesgo de retornos en ausencia de condiciones suficientes de seguridad, dignidad y sostenibilidad.

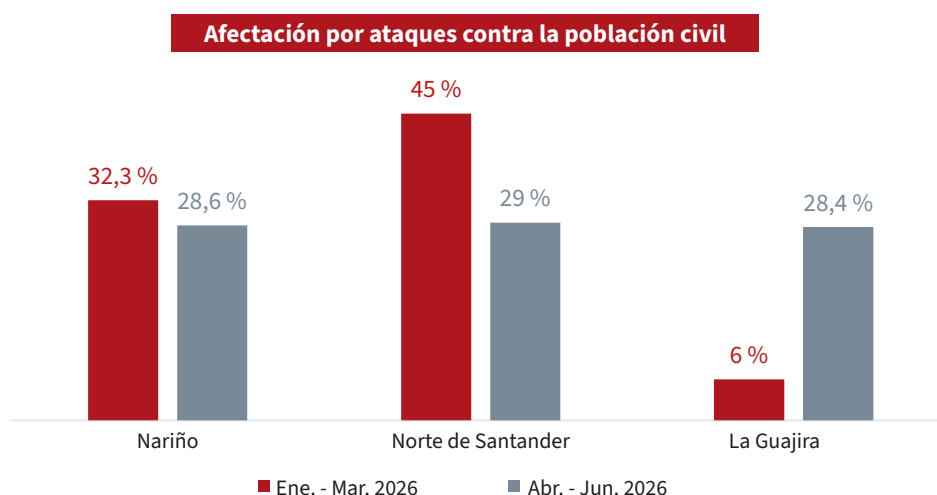


5.2 Ataques contra la población civil

Los ataques contra la población civil, incluyendo ataques contra bienes de propiedad civil, asesinatos ilícitos, amenazas e intimidaciones, continúan siendo uno de los principales riesgos de protección identificados durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, el 29 % de los hogares reportó haber sido afectado por este riesgo, lo que representa una disminución de 5,5 puntos porcentuales frente al periodo enero a marzo de 2026 (34,5 %). Sin embargo, esta reducción presenta variaciones territoriales importantes y debe analizarse en relación con otras dinámicas de protección, particularmente el desplazamiento forzado y las restricciones a la movilidad.

Las tendencias presentan diferencias significativas entre los departamentos monitoreados. En **Nariño**, los hogares que reportaron ataques contra la población civil disminuyeron del 32,3 % en el primer trimestre al 28,6 % entre abril y junio.

En **Norte de Santander**, la proporción pasó del 45 % al 29 %. En contraste, **La Guajira** registró un incremento considerable, pasando del 6 % al 28,4 % durante el mismo periodo. Este aumento se produce en un contexto de persistente violencia letal y disputas territoriales entre GANE; durante el primer trimestre de 2026 se registraron 69 homicidios en el departamento²². Estas variaciones no necesariamente reflejan cambios equivalentes en la gravedad o exposición al riesgo. Los hallazgos cualitativos muestran que los ataques, amenazas e intimidaciones mantienen una estrecha relación con las dinámicas de control territorial y continúan actuando como factores que impulsan el desplazamiento forzado y modifican los patrones de movilidad y protección de las comunidades.



22. Urieles, R. (2026, 6 de abril). Así se reconfigura el nuevo mapa de la violencia en la Sierra Nevada: 280 muertos en Magdalena, La Guajira y Cesar en primer trimestre de 2026. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-se-reconfigura-el-nuevo-mapa-de-la-violencia-en-la-sierra-nevada-280-muertos-en-magdalena-la-guajira-y-cesar-en-primer-trimestre-de-3545748>

En **Norte de Santander**, la intensificación de la confrontación entre GANes y entre GANes y fuerza pública, junto con la creciente utilización de UAS con AEI han ampliado las modalidades de exposición de la población civil a hostilidades. Durante el primer semestre de 2026, se documentaron 11 eventos asociados al uso de drones: seis estuvieron dirigidos contra bienes militares y cinco ocurrieron en escenarios de confrontación que generaron afectaciones sobre personas y bienes civiles.

En Tibú, un ataque con AEI lanzados desde drones contra una iglesia y una vivienda causó la muerte de un niño de 10 años y dejó cinco personas civiles heridas, entre ellas una niña de dos años²³. Este tipo de incidentes evidencia los riesgos que las nuevas modalidades de confrontación generan para la población civil y plantea preocupaciones en materia de protección y respeto del principio de distinción. La imprevisibilidad y alcance de los ataques mediante UAS contribuyen además a ampliar la percepción de inseguridad y pueden generar nuevos desplazamientos.

La información cualitativa sugiere además que las afectaciones asociadas al uso de UAS y AEI podrían encontrarse subregistradas en los datos de hogares, dado que las personas tienden a reportar el desplazamiento forzado como hecho victimizante principal, aunque este haya sido precedido o desencadenado por ataques u otras formas de exposición a las hostilidades.

Los ataques, amenazas e intimidaciones presentan impactos diferenciados sobre determinados grupos poblacionales, particularmente liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y autoridades étnicas. En contextos de disputa territorial, estos perfiles pueden ser objeto de señalamientos por presunta colaboración con actores rivales, incrementando su exposición a amenazas, estigmatización, homicidios y desplazamiento. Un actor clave en Norte de Santander señaló que líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de amenazas y asesinatos tras ser señalados de colaborar con alguno de los GANE.

Durante el primer semestre de 2026, la Defensoría del Pueblo registró el asesinato de 67 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos (55 hombres y 12 mujeres) así como 58 masacres que dejaron 238 víctimas²⁴, evidenciando la persistencia de otras formas graves de violencia contra la población civil.

En Nariño, la violencia contra liderazgos étnicos tuvo impactos directos sobre la protección colectiva de las comunidades. A finales de marzo se registró el asesinato de un integrante de la Guardia Indígena Awá en el resguardo Tortugaña Telembí, en jurisdicción de Barbacoas, seguido por acciones de intimidación y desplazamiento de familias de la comunidad. En junio, se registró el asesinato de un líder indígena Awá en el resguardo Chingui-

23. Quintero, L. N. (2026, 19 de junio). Ataque a iglesia cristiana y una casa en zona rural del Norte de Santander con drones explosivos: un menor de 10 años falleció en los hechos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ataque-a-iglesia-cristiana-y-una-casa-en-zona-rural-del-norte-de-santander-con-drones-explosivos-un-menor-de-10-anos-fallecio-en-los-hechos-3565444>

24. Defensoría del Pueblo. (2026, 24 de junio). En cinco meses, 67 lideresas y líderes asesinados y 58 masacres: Colombia no detiene la violencia en los territorios. <https://www.defensoria.gov.co/-/colombia-no-detiene-la-violencia-en-los-territorios>

rito Mira, zona rural de Tumaco²⁵. **En la Guajira**, los enfrentamientos en la jurisdicción de la Sierra Nevada llevaron a una organización de la sociedad civil a expresar preocupación por la protección de los liderazgos tradicionales y la población indígena ubicada en territorios afectados por la disputa entre GANE²⁶.

Las amenazas y ataques contra estos liderazgos generan impactos que trascienden a las víctimas directas y pueden debilitar mecanismos comunitarios de representación, interlocución, alerta y protección colectiva, así como aumentar el temor de otros miembros de la comunidad a asumir roles de liderazgo o visibilizar afectaciones.

Las amenazas e intimidaciones se insertan además en dinámicas más amplias de regulación y control social ejercidas por GANE sobre las comunidades. En **Nariño**, actores clave reportaron la imposición de sanciones económicas y multas, mecanismos paralelos de resolución de conflictos y cobros por servicios, prácticas mediante las cuales los actores armados regulan aspectos de la vida cotidiana y refuerzan su control sobre la población y el territorio. Un actor clave señaló que *“al final el control del pueblo lo tiene esa gente. Lo que hacen es imponer, sancionar o multar de la manera que ellos quieran”*. Asimismo, indicó que *“ahora cobran mensualidades por la recolección de basuras y, en ocasiones, estas cuotas son muy elevadas en comparación con la cantidad de residuos que entrega cada familia”*. (EAC, Nariño)

Estas formas de gobernanza armada condicionan el comportamiento de la población y regulan distintos aspectos de la vida cotidiana de las comunidades. El incumplimiento de normas o condiciones impuestas por los GANE puede derivar en amenazas, represalias y otras formas de violencia, incluyendo desplazamiento forzado. Asimismo, la imposición de horarios, normas de comportamiento y controles sobre la circulación contribuye a restricciones a la movilidad y a procesos de autoprotección mediante los cuales las personas modifican preventivamente sus actividades cotidianas y patrones de movilidad para reducir su exposición a amenazas y otras formas de violencia.

Las consecuencias de los ataques, amenazas e intimidaciones se manifiestan en afectaciones físicas, psicosociales, familiares y comunitarias. Las formas más graves incluyen homicidios y lesiones de personas civiles, entre ellas NNA, así como afectaciones derivadas de la exposición a AEI y otros artefactos explosivos. La destrucción o afectación de viviendas y otros bienes civiles genera además pérdidas materiales, puede afectar los medios de vida y actuar como factor desencadenante de nuevos desplazamientos.

Ante escenarios de amenaza y exposición a hostilidades, algunos hogares recurren a la separación temporal del núcleo familiar como estrategia de afrontamiento, priorizando el desplazamiento de NNA, mujeres y personas mayores, mientras

25. Ospina, D. (2026, 16 de junio). Asesinan a líder indígena Awá en zona rural de Tumaco: su esposa resultó herida y autoridades investigan el crimen. Infobae Colombia. <https://www.infobae.com/colombia/2026/06/16/asesinan-a-lider-indigena-awa-en-zona-rural-de-tumaco-su-esposa-resulto-herida-y-autoridades-investigacion-el-crimen/>

26. La Guajira Noticias. (2026, 16 de junio). MINW alerta sobre riesgo humanitario en la Sierra Nevada y exige protección urgente para las comunidades indígenas. <https://www.laguajiranoticias.com/minw-alerta-sobre-riesgo-humanitario-en-la-sierra-nevada-y-exige-proteccion-urgente-para-las-comunidades-indigenas/>

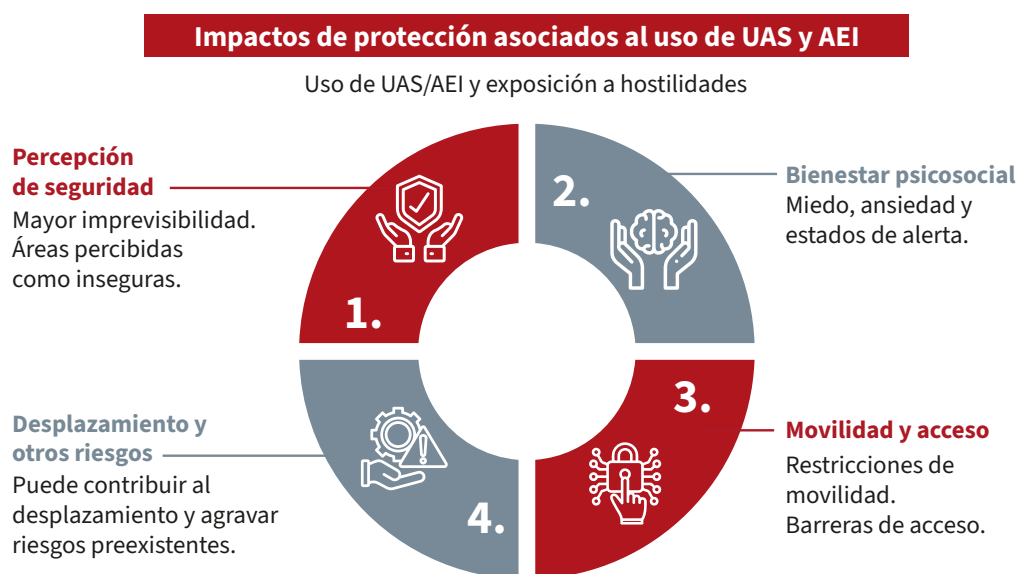
otros integrantes permanecen en el territorio. Si bien esta estrategia busca reducir la exposición inmediata de determinados miembros del hogar, la separación puede debilitar las redes familiares de apoyo, incrementar las responsabilidades de cuidado y generar nuevas necesidades de protección tanto para quienes se desplazan como para quienes permanecen en el territorio.

En cuanto a la salud mental y el bienestar psicosocial, las personas reportan estados de alerta permanente, con sensación de pánico y ansiedad que se precipita por sonidos que se asemejen a explosiones o la activación de motores de combustión. En **Norte de Santander**, un actor clave relacionó estas afectaciones con la incertidumbre frente a la ocurrencia de enfrentamientos y, particularmente, con la creciente presencia de drones, señalando que “*ya no hay que mirar a los lados, sino hacia arriba*”

Este testimonio refleja cómo la incorporación de amenazas aéreas a las dinámicas de confrontación puede ampliar la percepción del riesgo y generar estados de alerta incluso en ausencia de hostilidades directas.

En **Nariño**, actores clave relacionan las amenazas y otros hechos de violencia con afectaciones emocionales colectivas, debilitamiento de los liderazgos comunitarios y deterioro de las relaciones de confianza en resguardos y consejos comunitarios. De esta manera, los impactos trascienden a las víctimas directas y afectan los mecanismos colectivos de organización, representación y protección de las comunidades.

El temor a represalias constituye además una barrera crítica para acceder a mecanismos institucionales de protección y justicia. Entre los hogares que reportaron barreras para denunciar los



La visualización sintetiza relaciones identificadas en el análisis de protección y no implica que todos los impactos se produzcan necesariamente de la misma manera o al mismo tiempo.

hechos, el 72,7 % señaló el miedo a represalias o estigmatización por parte de GANE. En contextos donde estos actores ejercen vigilancia y control social, la denuncia puede ser percibida como una acción que incrementa la exposición individual y familiar, contribuyendo al subregistro de los hechos y limitando la capacidad institucional para dimensionar y responder a los riesgos de protección. Un actor clave en Nariño manifestó *“Si uno va a un Comité de Justicia Transicional y no tiene confianza para expresar lo que está pasando, entonces es una verdad a medias; y con una verdad a medias no se va a solucionar de manera estructural lo que uno quisiera”*.

Estas dinámicas afectan también la capacidad de respuesta institucional. Actores clave señalaron que funcionarios públicos pueden enfrentar riesgos y amenazas por parte de GANE asociados al ejercicio de sus funciones, lo que limita la capacidad de las instituciones locales para operar en determinados territorios. La interacción entre temor de las comunidades, el subregistro de los hechos y restricciones a la actuación institucional puede generar vacíos de protección, particularmente en las zonas donde la población presenta mayores niveles de exposición a los riesgos. Como señaló un actor clave en Nariño *“hoy prácticamente las autoridades locales nos sentimos maniatados ante ejercer un control por los múltiples riesgos que genera”*.

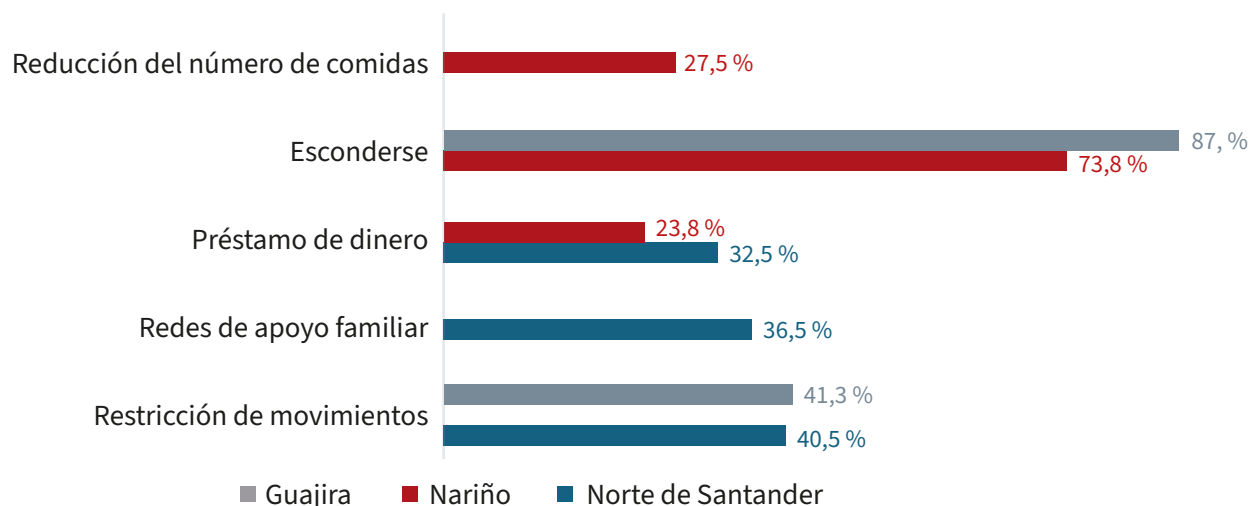
Las estrategias de afrontamiento adoptadas por los hogares combinan mecanismos de autoprotección frente a las amenazas con otras medidas que pueden deteriorar sus condiciones socioeconómicas. En **Norte de Santander**, las principales

estrategias reportadas fueron acudir a redes familiares (33,9 %), reducir el consumo de alimentos (32,1 %) y esconderse (31,3 %). En **Nariño**, predominan esconderse (60,7 %) y reducir la ingesta de alimentos (28,6 %), mientras que, en **La Guajira** las familias optaron por esconderse (81,5 %) y restringir su movilidad (59,3 %).

Esconderse y restringir los movimientos constituyen mecanismos orientados a reducir la exposición inmediata a amenazas y ataques. En contraste, la reducción del consumo de alimentos constituye una estrategia que puede deteriorar las condiciones de bienestar del hogar y refleja el impacto indirecto de la violencia sobre los medios de vida y la capacidad para satisfacer necesidades básicas. En hogares monoparentales con jefatura femenina, esta estrategia puede generar impactos diferenciados cuando las mujeres reducen su propio consumo para priorizar la alimentación de NNA y personas mayores.



Estrategias de afrontamiento ataques contra la población civil



Nota: Los hogares suelen combinar estrategias de afrontamiento ante la exposición al riesgo

Frente a la presencia de las amenazas, las comunidades han desarrollado mecanismos propios de alerta y autoprotección. En **Norte de Santander**, se reportó el uso de grupos de WhatsApp para compartir información sobre presencia de GANE, enfrentamientos y avistamientos de drones. Además, algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) dotadas con chalecos de identificación comunitaria promueven el uso de banderas blancas para “evitar ser atacados por los drones” o “evitar estar en medio de las hostilidades de los GANE”. Sin embargo, algunas de estas estrategias pueden generar riesgos secundarios. En zonas donde los GANE establecen puntos de control y revisan dispositivos móviles, el almacenamiento o circulación de información sobre actores armados puede incrementar la exposición de las personas a señalamientos, amenazas o represalias. Esto evidencia la necesidad de analizar las capacidades comunitarias no solo en función de su utilidad inmediata, sino también de los riesgos que pueden generar en contextos de control territorial.

En **Nariño**, los liderazgos comunitarios, las autoridades y la Guardia Indígena desempeñan un rol fundamental en la transmisión de información, activación de alertas tempranas y la coordinación de respuestas comunitarias. No obstante, la información cualitativa evidencia que estos mecanismos dependen en gran medida de redes informales y de la disponibilidad de conectividad, sin que siempre existan rutas claras y estables para trasladar las alertas hacia actores institucionales capaces de activar una respuesta de protección. Un actor clave indica:

“Por ejemplo, cuando han asesinado, que se escuchan los tiros, la gente dice: se escuchó un tiro más o menos en tal parte. Entonces eso es, depende cómo sea, dicen: “No, tal vez mataron a alguien, tal vez lo hirieron”, o son enfrentamientos, o cosas así. Entonces ya el gobernador está en alerta de eso. Hay unas partes donde sí hay señal de celular, entonces a veces se puede dar la información a través de eso, o la gente busca sus

medios, pero que haya una ruta así establecida, clara”. (EAC, Nariño 2026).

Los hallazgos cualitativos evidencian limitaciones en las capacidades institucionales para responder a las necesidades de protección de las personas, grupos y comunidades afectadas. En los territorios monitoreados, la respuesta se concentra principalmente en la recepción de declaraciones de hechos victimizantes y la gestión de entregas parciales de ayuda humanitaria, mientras existen brechas en materia de prevención, protección sostenida y recuperación. En **Nariño**, las comunidades perciben particularmente una ausencia de medidas estructurales orientadas a la reparación colectiva y al fortalecimiento de mecanismos propios de gobierno y protección.

Estas limitaciones, sumadas al temor a represalias, la desconfianza frente a determinados mecanismos institucionales y las restricciones que enfrentan funcionarios para operar en zonas bajo influencia de GANE, reducen la capacidad de identificar y responder oportunamente a los riesgos de protección. Como resultado, se profundiza el subregistro y aumenta la dependencia de mecanismos comunitarios de protección, cuyo alcance continúa condicionado por las situaciones de seguridad, los recursos disponibles y la capacidad de articulación con actores institucionales y humanitarios.

“Hasta el momento no ha habido ninguna intervención estructural; no ha existido reparación colectiva” (EAC, Nariño, 2026).



5.3 Reclutamiento, uso y utilización

El reclutamiento, uso y utilización de NNA continúa siendo un riesgo crítico de protección en **Norte de Santander y Nariño**, particularmente en territorios rurales con influencia GANE. Durante el primer semestre de 2026, la Defensoría del Pueblo alertó sobre 51 casos a nivel nacional, de los cuales 15 se registraron en Norte de Santander, el departamento con mayor número de casos reportados, y tres casos en Nariño. Del total nacional, el 17 % correspondió a NNA pertenecientes a pueblos indígenas y el 12 % a población afrocolombiana ²⁷.

La información recopilada por actores de protección sugiere una afectación mayor a la reflejada en los registros oficiales. En **Norte de Santander**, aunque el reclutamiento, uso y utilización representó el 1 % de los abusos reportados directamente por hogares mediante el monitoreo de protección, durante el trimestre Benposta documentó 22 casos asociados a la vinculación de NNA a GANE, de los cuales el 60 % correspondió a niños (varones).

27. Defensoría del Pueblo. (2026, 26 de junio). Defensoría del Pueblo registra 51 casos de reclutamiento forzado de NNA en 2026. <https://www.defensoria.gov.co/-/51-casos-de-reclutamiento-forzado-de-nna-en-2026>

Asimismo, el ICBF identificó aproximadamente 13 situaciones relacionadas con riesgos de vinculación y alertas tempranas en municipios del Catatumbo²⁸. Estas diferencias evidencian las dificultades para dimensionar el fenómeno únicamente a partir del reporte directo de los hogares y la importancia de triangular la información con actores especializados y mecanismos comunitarios e institucionales de protección. Esta brecha adquiere particular relevancia al considerar las situaciones de riesgo que no necesariamente derivan en un caso formalmente registrado.

Entre abril y mayo, actores de protección identificaron 91 casos de amenazas directas de reclutamiento de NNA por parte de GANE en Norte de Santander. El temor a denunciar y las estrategias familiares de autoprotección pueden contribuir a reducir la visibilidad del fenómeno, particularmente en comunidades donde compartir información sobre situaciones que afectan a otros NNA puede incrementar la exposición de las propias familias.

“...Actualmente, muchas familias se concentran únicamente en proteger a sus propios hijos, mientras prevalece el miedo a denunciar situaciones que afecten a otros. Esto se refleja en dinámicas de silenciamiento y autoprotección, expresadas en frases como: “yo cuidó lo mío”, “no he visto nada” o “usted no sabe nada y yo tampoco”(…). A su vez, en este mismo consorcio identificaron entre abril y mayo 91 casos de amenazas directas de reclutamiento a NNA por parte de GANE.” (EAC, Norte de Santander).

En **Nariño**, aunque los casos reportados directamente a través del monitoreo de protección son limitados, diferentes indicadores evidencian condiciones que requieren seguimiento desde protección de la niñez. El 5,5 % de los hogares monitoreados reportó necesidades de protección y acceso a servicios dirigidos a la niñez, mientras que dos hogares presentaron necesidades específicas de protección infantil y siete NNA en edad escolar fueron identificados fuera del sistema educativo. Asimismo, Nariño continúa figurando entre los departamentos con registros de desvinculación de²⁹ de grupos armados. Estos hallazgos deben analizarse en relación con las dinámicas de presencia o control territorial de GANE y las limitadas oportunidades educativas y económicas en zonas rurales, factores que pueden incrementar la exposición de NNA a estrategias de captación y vinculación.

En **Norte de Santander**, los actores clave identificaron que la exposición al reclutamiento se ve agravada por la limitada disponibilidad de alternativas económicas, educativas y recreativas para adolescentes en zonas rurales. Según un actor clave, estos factores son aprovechados por GANE, mediante estrategias de captación que combinan coerción, persuasión e incentivos materiales, incluyendo dinero, vehículos, teléfonos celulares, regalos y promesas de reconocimiento o estatus. Asimismo, se reportó el uso de redes sociales para establecer contacto con NNA, generar vínculos de confianza y facilitar procesos de captación.

28. EAC Coordinadora Centro zonal ICBF (17/06/2026)

29. Procuraduría General de la Nación. (2026, 20 de mayo). Prevención del reclutamiento infantil es responsabilidad de todo el Estado: Procuraduría. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/prevencion-reclutamiento-infantil-responsabilidad-todo-estado-procuraduria.aspx>

En **Nariño**, se identificaron patrones similares en un contexto marcado por la persistencia del control territorial de GANE y las limitadas oportunidades de desarrollo en las zonas rurales. Si bien las comunidades perciben una disminución de las formas más visibles de vinculación de los NNA, actores clave coinciden en señalar una transformación hacia modalidades de reclutamiento menos evidentes, basadas en la construcción gradual de vínculos, el uso de incentivos y el engaño. Entre las prácticas reportadas se encuentran ofertas laborales engañosas, incluyendo propuestas de trabajo en actividades mineras que posteriormente derivan en el traslado de adolescentes hacia otras zonas del país y su incorporación a estructuras armadas.

“**Sigue habiendo reclutamiento, aunque sea porque el niño tomó la decisión de vincularse, porque piensa que puede andar con plata, con buenas motos, buenos celulares. Entonces, siento que esa es una manera de enganchar, y al final eso ha sido la manera de reclutar de ellos, como buscar la manera de que la persona piense que mejor prefiera irse a un grupo armado que a seguir estudiando. porque ellos piensan que estando allá van a tener todo lo que quieran: dinero, las joyas, [...] que van a tener recursos, plata o unos celulares y buenas motos y eso, los va a animar a que se quieran vincular más**”

(EAC, Nariño 2026).

La exposición al riesgo presenta patrones diferenciados según edad, género, pertenencia étnica y

otras condiciones de vulnerabilidad. En Nariño y Norte de Santander, actores clave identificaron una mayor exposición entre adolescentes varones de 12 a 16 años, particularmente aquellos pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas ubicadas en zonas rurales dispersas. Las limitadas oportunidades educativas y económicas, combinadas con la presencia y control territorial de GANE, pueden reducir las alternativas disponibles para los adolescentes y facilitar el aprovechamiento de estas condiciones mediante incentivos materiales y promesas de estatus.

Los NNA migrantes, particularmente de nacionalidad venezolana, pueden enfrentar factores adicionales de exposición. Según un informe presentado por COALICO, las barreras para regularizar el estatus migratorio pueden generar exclusión y limitar el acceso a derechos y oportunidades, condiciones que pueden ser instrumentalizadas por GANE en sus estrategias de captación³⁰.

Las niñas enfrentan modalidades diferenciales de reclutamiento. Actores clave reportaron estrategias de establecimiento de relaciones con integrantes de GANE que pueden derivar en uniones forzadas, explotación, obtención de información y realización de labores domésticas y de cuidado dentro de estructuras armadas³¹. Estas dinámicas pueden reducir la visibilidad del reclutamiento de niñas y adolescentes al presentarse inicialmente como relaciones afectivas y no ser necesariamente reconocidas por las comunidades como mecanismos de reclutamiento.

30. COALICO (2026, junio). El riesgo no cesa II: Análisis de las afectaciones contra niñas, niños y adolescentes en Norte de Santander y Soacha (2024-2026) (Informe situacional) [PDF]. <https://coalico.org/wp-content/uploads/2026/06/Informe-El-riesgo-no-cesa-II.pdf>

31. MAP-OEA (2026, mayo). Cuadragésimo informe periódico del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) (OEA/Ser.G CP/doc.6215/26) [PDF]. https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2026/06/Informe-Periodico_40_esp_1.pdf

“Conocí casos directos donde las adolescentes la enamoraba el comandante de los grupos o la enamoraba uno de los miembros con un nivel de poderío específico dentro del grupo y precisamente era utilizada para buscar información, para llevar a otros chicos al grupo”

(EAC, Nariño 2026).

Las consecuencias del reclutamiento, uso y utilización afectan de manera directa los derechos, la integridad y los proyectos de vida de los NNA. La vinculación a estructuras armadas puede implicar la interrupción de la educación, separación familiar y comunitaria y exposición a diferentes formas de violencia, explotación y utilización en actividades asociadas al conflicto armado. Actores clave reportaron además exposición temprana a armas, dinero, consumo de sustancias psicoactivas y participación en dinámicas de intimidación y ejercicio de control sobre otras personas.

“Muchos jóvenes comienzan a sentirse con el poder de mandar, de generar miedo, de amenazar y de que nadie les puede decir nada”.

(EAC, Nariño 2026).

La utilización de adolescentes previamente vinculados para atraer a otros NNA amplía además las redes de captación dentro de las propias comunidades y dificulta la identificación temprana del riesgo, al trasladar parte del proceso de acercamiento hacia relaciones entre pares y vínculos preexistentes de confianza. Esta dinámica puede contribuir a la normalización progresiva de la presencia de los GANE y debilitar los mecanismos comunitarios para identificar y responder a situaciones de riesgo.

Los impactos se extienden a las familias y comunidades. Frente al temor de reclutamiento, algunos hogares adoptan medidas como restringir la movilidad de los NNA, enviarlos fuera del territorio o recurrir a la separación temporal del núcleo familiar para reducir su exposición. Si bien estas estrategias responden a una necesidad inmediata de protección, también pueden interrumpir la continuidad educativa, debilitar las redes familiares y comunitarias y generar nuevos desplazamientos. A nivel comunitario, la vinculación de adolescentes y el temor a denunciar genera desconfianza entre familias. Asimismo, actores clave reportaron que el silenciamiento frente a posibles casos, la normalización de la presencia de GANE y el temor a represalias pueden debilitar la capacidad de liderazgos y comunidades para identificar tempranamente situaciones de riesgo y activar mecanismos de protección.

La amenaza de reclutamiento genera además afectaciones psicosociales que trascienden a los NNA directamente expuestos. Madres, padres y cuidadores reportan miedo, incertidumbre y estrés asociados a la posibilidad de vinculación de sus hijos e hijas, particularmente en comunidades donde la presencia de GANE es permanente. Actores clave reportaron que NNA que permanecen en estos territorios también experimentan afectaciones emocionales y psicosociales derivados de la pérdida o desaparición de familiares y otras redes de apoyo y por la exposición continuada a situaciones de violencia. Estas afectaciones emocionales se producen en contextos donde la disponibilidad de servicios especializados de salud mental y apoyo psicosocial continúa siendo limitada, especialmente en zonas rurales y dispersas

de Nariño y Norte de Santander, reduciendo las posibilidades de acceso oportuno a acompañamiento para NNA, familias y comunidades.

Frente a estos riesgos, las comunidades han desarrollado mecanismos propios de prevención, alerta y protección. Las autoridades indígenas, la Guardia Indígena, los liderazgos comunitarios y las redes familiares desempeñan un papel importante en la identificación temprana de situaciones de riesgo, la circulación de alertas y la activación de medidas comunitarias para proteger a NNA. Asimismo, se reportó el uso de canales comunitarios de WhatsApp para compartir alertas e identificar situaciones en las que NNA permanecen sin supervisión de personas adultas cuidadoras. Estas capacidades reflejan el papel central de las redes comunitarias en la prevención del reclutamiento, particularmente en territorios con limitada presencia institucional.

Sin embargo, el uso de canales digitales para compartir información sensible puede generar riesgos adicionales en contextos donde GANE ejercen vigilancia, revisan dispositivos o controlan las comunicaciones. En estos escenarios, los mecanismos comunitarios de alerta requieren considerar medidas para reducir la exposición de NNA, familias y liderazgos comunitarios a posibles señalamientos o represalias.

La respuesta institucional presenta avances, aunque persisten brechas significativas de cobertura y acceso, particularmente en zonas rurales y dispersas. En Norte de Santander, entidades

como el ICBF y la Unidad de Apoyo Local (UAL) brindan acompañamiento psicosocial y activan rutas de protección; sin embargo, actores clave perciben una capacidad institucional limitada para responder de manera sostenida en territorios con alta presencia de GANE y dificultades de acceso. En Nariño, la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento fortaleció las acciones preventivas mediante la ampliación de la cobertura de las rutas de atención inmediata, pasando de 20 a 36 municipios con herramientas para la prevención, activación de alertas tempranas y articulación entre autoridades locales, instituciones educativas y comunidades³². En ambos departamentos organizaciones humanitarias especializadas en protección de la niñez han complementado estas acciones mediante el fortalecimiento de los Equipos de Acción Inmediata (EAI) municipales y procesos de capacitación para mejorar la identificación y respuesta frente a situaciones de riesgo de reclutamiento.

No obstante, la persistencia de amenazas directas, las modalidades de captación cada vez menos visibles, el temor de las familias a denunciar y las dificultades de acceso institucional a zonas rurales continúan limitando la identificación temprana y la respuesta efectiva. En este contexto, persisten brechas en la articulación entre mecanismos comunitarios de alerta, instituciones educativas, los EAI y las rutas institucionales de protección, que pueden retrasar la activación de medidas de prevención y protección frente a situaciones de riesgo.

32. Gobernación de Nariño. (2026, 6 de abril). Estrategia contra el reclutamiento infantil alcanza más de 36 municipios. <https://narino.gov.co/noticias/estrategia-contra-el-reclutamiento-infantil-alcanza-mas-de-36-municipios/>



5.4 Restricciones a la movilidad en Nariño

“Hay esa restricción a la movilidad, que es un hecho que la institucionalidad no lo reconoce, o sí lo reconocen no hay garantías de nada, entonces, las familias tienen es que someterse a eso, es como que ya eso se ha normalizado, ya se sabe que no se puede andar” (EAC, Nariño 2026).

Entre abril y junio, las restricciones a la movilidad representaron el 5 % de los abusos reportados por los hogares monitoreados en Nariño, mientras que el 8 % identificó este riesgo en su entorno actual. Los hallazgos muestran una afectación particular sobre comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en zonas rurales y dispersas, donde las restricciones se relacionan principalmente con la presencia o control territorial de GANE y con la presencia o sospecha de contaminación por MAP y AEI. De acuerdo con funcionarios municipales del departamento, los GANE utilizarían estos artefactos como mecanismo para limitar el ingreso de la Fuerza Pública y controlar el acceso a determinadas zonas del territorio.

“Solo el hecho de la presencia de los grupos hay una presencia más significativa de minas anti-personal; las utilizan como una forma de control, es por esto por lo que se ha pedido de manera reiterada a la fuerza pública una forma de realizar un trabajo de desminado por que hoy hay un riesgo para la población porque inclusive están muy cerca a la cabecera municipal”

(EAC, Nariño 2026).

La incertidumbre sobre la ubicación de áreas contaminadas amplía además los efectos de la amenaza más allá de las zonas donde se ha confirmado la presencia de artefactos explosivos. Ante la ausencia de información clara sobre si determinadas áreas continúan contaminadas, las comunidades evitan lugares previamente identificados como peligrosos y modifican preventivamente sus desplazamientos y horarios. De esta manera, la presencia o sospecha de MAP y AEI puede generar procesos de autocontención que limitan la movilidad y modifican las prácticas cotidianas de las comunidades, incluso en ausencia de una restricción explícita impuesta por actores armados.

“Actualmente la restricción también va muy ligada a la protección por el tema de minas, por eso los horarios también como que en cierto horario no se sale. Sí, también, pues, porque no se tiene seguridad de que todas esas minas las hayan levantado, o sea, no se sabe. Entonces, pues, la verdad uno trata como de evitar que pasen esos accidentes, como no se tiene, no se conoce con claridad si existen o no existen. Entonces, esos sitios que se conocía que estaban minados, yo creo que la gente ya no va.” (EAC, Nariño 2026).

Paralelamente, los GANE imponen de manera directa normas y controles sobre la movilidad de la población, incluyendo horarios de circulación y restricciones para transitar por determinadas zonas. El incumplimiento de estas disposiciones puede incrementar la exposición a amenazas, castigos, privación de la libertad, desaparición u

homicidio, configurando un entorno coercitivo en el que las comunidades modifican sus patrones de movilidad y actividades cotidianas para reducir la exposición a posibles represalias.

“Puede movilizarse hasta las 6:00 de la tarde y usted salió a las 7:00”, pues ya asume las consecuencias de que es así. Porque si incumples las normas de movilizarse, puede que no le pase nada y normal, no le pasa nada, pero puede ser tu día de malas y te encontraste al grupo, pues te mata o te lleva, te castiga” (EAC, Nariño 2026).

Durante el trimestre de análisis se identificaron restricciones a la movilidad impuestas por GANE en algunas zonas rurales, en el marco del proceso electoral. En zonas rurales de Tumaco y Roberto Payán, actores clave reportaron limitaciones para salir de las comunidades durante los días previos a las votaciones y la exigencia de presentar el certificado electoral como condición para transitar por determinados territorios. Estas prácticas evidencian cómo el control sobre la movilidad puede ser utilizado por GANE para interferir en la vida civil y condicionar el ejercicio de derechos de la población.

Las restricciones generan impactos diferenciados sobre comunidades étnicas cuya movilidad se encuentra estrechamente vinculada al territorio y al desarrollo de prácticas productivas, sociales y culturales. Comunidades indígenas, incluyendo el pueblo Awá, reportaron afectaciones sobre actividades tradicionales como la pesca, la caza y el trabajo agrícola, así como la participación en espacios comunitarios. Actividades que anteriormente se desarrollaban durante la noche han sido modificadas o suspendidas debido al temor

a accidentes con artefactos explosivos y a la exposición a hostilidades entre GANE. Estas restricciones trascienden, por tanto, la limitación física de la movilidad y afectan el acceso al territorio, los medios de vida y las prácticas colectivas que contribuyen a la identidad, organización y protección comunitaria.

“Primero ya dijeron: “No se puede mover, ya no pueden salir”. Pero también el otro temor era porque ya se hablaba de sitios minados, como artefactos. Entonces, ya las comunidades, pues, obviamente, ¿quién se iba a regresar?” (EAC, Nariño 2026).

Entre las personas que reportaron afectación por restricciones a la movilidad, las principales condiciones de vulnerabilidad identificadas fueron condiciones médicas graves y discapacidad. La información cualitativa evidencia además afectaciones particulares sobre NNA y personas mayores, para quienes las restricciones pueden profundizar las barreras de acceso a servicios y derechos fundamentales.

“Se ven más afectada la población donde hay NNA, adultos mayores y personas con discapacidad quienes son los más vulnerables, este tipo de accionar ha limitado la atención a la población en el acceso a derechos fundamentales.”

El temor a encontrarse con el GANE, sufrir represalias o quedar expuesto a hostilidades constituye además un mecanismo indirecto de control social que refuerza las restricciones a la movilidad. La presencia de hombres armados y los antecedentes de violencia generan procesos de autocontención mediante los cuales las personas

limitan preventivamente sus desplazamientos incluso cuando no existe una orden explícita. La reiteración de estas dinámicas puede contribuir además a su normalización, en la medida en que las comunidades incorporan las restricciones a sus prácticas cotidianas como mecanismo para reducir la exposición al riesgo.

“Ya la gente no anda así en las noches, sobre todo porque que han pasado casos de que han asesinado jóvenes inocentes en otros resguardos, que no tenía nada que ver con el conflicto ni nada[...]. Entonces creo que la gente ya no necesita que la obliguen.” (EAC, Nariño 2026).

Las restricciones a la movilidad repercuten directamente en el acceso a derechos, servicios y medios de vida. Actores institucionales señalaron dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud, educación, protección y asistencia humanitaria, así como limitaciones para desarrollar actividades económicas y productivas indispensables para la subsistencia. En comunidades rurales y dispersas, estas restricciones pueden profundizar condiciones preexistentes de vulnerabilidad al limitar simultáneamente el acceso a servicios y las posibilidades de generar ingresos y obtener alimentos.

“Igualmente las dinámicas socioeconómicas cambian de manera significativa ya que el tener condiciones para moverse libremente hace que las familias se afecte de manera psicológica y no puedan salir a ejercer sus trabajos cotidianos para sostener a las familias, es por esto que igualmente se afecta su seguridad alimentaria y medios de vida” (EAC, Nariño, 2026).

Frente a estas restricciones, las comunidades han desarrollado diversas estrategias de afrontamiento orientadas a reducir la exposición al riesgo, entre ellas la modificación de horarios para actividades comunitarias e institucionales, la suspensión del tránsito por caminos considerados inseguros, la identificación colectiva de zonas con posible contaminación por MAP y AEI, y la restricción voluntaria de los desplazamientos durante la noche.

“Nosotros las actividades no las hacemos después de las 3:00 de la tarde, hasta esas horas máximo. O sea, que para actividades del resguardo o institucionales siempre se dice máximo hasta las 3:00 de la tarde, porque todo mundo puede moverse con tranquilidad” (EAC, Nariño 2026).

Aunque estas estrategias permiten reducir temporalmente la exposición a amenazas, también implican limitaciones sobre las actividades económicas, sociales y comunitarias y no modifican las condiciones que generan el riesgo. Su utilización prolongada puede contribuir a la normalización de las restricciones y aumentar la dependencia de mecanismos comunitarios de autoprotección para gestionar cotidianamente la exposición.

Las comunidades cuentan además con capacidades propias que contribuyen a mitigar los impactos de las restricciones a la movilidad. En comunidades indígenas como el pueblo Awá, estas capacidades se sustentan en mecanismos de organización comunitaria, prácticas tradicionales y formas propias de cuidado y recuperación. Entre ellas se

identifican procesos de sanación emocional y espiritual mediante medicina tradicional, así como acciones de sensibilización comunitaria orientadas a fortalecer la protección colectiva frente a los impactos del conflicto y las restricciones.

“Hicimos de sanación, a través de medicina tradicional, fue con la unidad de otras instituciones de medicina” (EAC, Nariño 2026).

En este contexto, las estructuras comunitarias y liderazgos desempeñan un papel central en la protección, tanto en la adopción de medidas para reducir la exposición al riesgo como el fortalecimiento de los mecanismos propios de recuperación y resiliencia. Las entrevistas realizadas con actores institucionales evidencian que la respuesta institucional y humanitaria frente a las restricciones a la movilidad se articula en gran medida a través de los liderazgos comunitarios y del acompañamiento de las organizaciones presentes en el territorio. Sin embargo, su alcance continúa siendo limitado por las condiciones de seguridad, las dificultades de acceso a las comunidades y el riesgo de represalias contra la población civil.

“Han sido muy pocas las acciones que se han realizado, teniendo en cuenta que hay un temor a que se tomen represalias contra la población; por lo tanto, se utilizan los mecanismos de comunicación con los líderes de los territorios para que puedan tener acciones de protección interna y posteriormente informar las necesidades de protección” (EAC, Nariño 2026).

En este contexto, los mecanismos comunitarios de alerta, comunicación y protección cumplen una función fundamental para mantener el vínculo entre las comunidades y los actores de respuesta. No obstante, la dependencia de estos mecanismos evidencia también una brecha de protección, al trasladar hacia las propias comunidades una parte importante de la identificación y gestión cotidiana del riesgo y limitar las posibilidades de implementar medidas preventivas y de acompañamiento sostenido en los territorios más afectados.



6 Recomendaciones

Entidades públicas responsables de implementación a nivel nacional y territorial

Acciones prioritarias / corto plazo

- 1. Alcaldías municipales, en coordinación con la UARIV, personerías y Comités Territoriales de Justicia Transicional: revisar y activar los planes de contingencia en municipios con nuevos desplazamientos, definiendo responsables, puntos de contacto, mecanismos de alojamiento temporal y rutas para orientación, toma de declaración y acceso al Registro Único de Víctimas (RUV).
- 2. ICBF y Equipos de Acción Inmediata (EAI), en coordinación con Secretarías de Educación, instituciones educativas y autoridades territoriales: actualizar y socializar las rutas locales de prevención y respuesta frente al reclutamiento, uso y utilización de NNA en municipios priorizados de Nariño y Norte de Santander, incluyendo directorios actualizados y mecanismos seguros para activar alertas desde escuelas y comunidades.
- 3. Alcaldías y Gobernaciones, en coordinación con las entidades competentes en Acción Integral contra Minas Antipersonal y organizaciones especializadas: priorizar acciones de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE) en comunidades donde se reporta presencia o sospecha de MAP y AEI, asegurando además que la población conozca los canales para reportar posibles áreas contaminadas y acceder a las rutas de atención.

Recomendaciones de mediano plazo / estructurales

- 4. Alcaldías y Gobernaciones, a través de las entidades sectoriales competentes: establecer mecanismos regulares de atención en zonas rurales y de difícil acceso, mediante equipos móviles o jornadas programadas, priorizando territorios donde las restricciones a la movilidad y la presencia o control de GANE limitan el acceso de la población a servicios de protección.
- 5. UARIV, en coordinación con Alcaldías y Gobernaciones: fortalecer el seguimiento a los hogares desplazados más allá de la respuesta inmediata, articulando asistencia, alojamiento, recuperación de medios de vida y acompañamiento a las condiciones para un retorno, reubicación o integración local seguros y sostenibles.

- 6. ICBF y Secretarías de Educación, en articulación con los EAI y autoridades territoriales: fortalecer la prevención del reclutamiento de NNA mediante continuidad educativa, espacios recreativos y alternativas de formación y desarrollo para adolescentes en zonas rurales, junto con capacidades técnicas y operativas sostenidas para la identificación temprana y activación de rutas.
- 7. Secretarías de Salud departamentales y municipales, en coordinación con la UARIV y prestadores del PAPSIVI: ampliar el acceso a salud mental y apoyo psicosocial para personas, familias y comunidades afectadas por el conflicto armado, priorizando zonas rurales y dispersas y asegurando rutas de atención para personas sobrevivientes y víctimas indirectas de accidentes e incidentes relacionados con MAP y AEI.

Entidades de protección y garantía de derechos

Acción prioritaria / corto plazo

- 8. Defensoría del Pueblo y personerías municipales, en coordinación con la fiscalía general de la Nación y la Unidad Nacional de Protección según corresponda: reforzar canales seguros y confidenciales para el reporte y seguimiento de amenazas, homicidios y desapariciones, promoviendo investigaciones oportunas y la activación y seguimiento de las rutas de respuesta frente a Alertas Tempranas, incluida la CIPRAT en zonas con riesgos inminentes.

Recomendación de mediano plazo / estructural

- 9. Unidad Nacional de Protección y Ministerio del Interior, en coordinación con autoridades territoriales: fortalecer medidas individuales y colectivas de prevención y protección para líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y autoridades étnicas, asegurando que las medidas se adapten a las dinámicas territoriales y se articulen con los mecanismos propios de protección de las comunidades.

Cooperación internacional y organizaciones humanitarias

Acción prioritaria / corto plazo

- 10. Organizaciones humanitarias con programas de protección y salud mental y apoyo psicosocial, en coordinación con Secretarías de Salud y prestadores de servicios: incorporar sistemáticamente la identificación de necesidades de SMAPS y la remisión a servicios disponibles en las respuestas a desplazamientos, ataques, amenazas de reclutamiento y otros eventos críticos, priorizando NNA, personas cuidadoras y comunidades rurales con acceso limitado a servicios.

Recomendación de mediano plazo / estructural

- 11. mantener el seguimiento e incidencia sobre desplazamiento, restricciones a la movilidad, reclutamiento y modalidades emergentes de violencia, incluido el uso de UAS con AEI, utilizando los hallazgos para activar mecanismos de coordinación y seguimiento con las entidades responsables y para promover, en los espacios de diálogo pertinentes, compromisos verificables para prevenir y poner fin al reclutamiento, uso y utilización de NNA.
- 12. Organizaciones humanitarias con experiencia en protección basada en la comunidad, en coordinación con Juntas de Acción Comunal, autoridades étnicas, Guardias Indígenas y otros liderazgos comunitarios: implementar o fortalecer programas de protección basada en la comunidad que apoyen el mapeo participativo de riesgos, el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de alerta y comunicación y la definición de protocolos seguros para activar alertas y remitir necesidades de protección. Estas acciones deberán incluir pautas para el manejo responsable de datos personales e información sensible, particularmente en grupos de WhatsApp y otros canales digitales, con el fin de reducir riesgos de señalamientos o represalias.